

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

**Vistos y oídos los intervinientes:**

En estos autos RIT 449-2019 del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha siete de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia por la que, en lo que interesa, se condenó al acusado **JORGE ANTONIO ARTEAGA HIDALGO** a la pena de **SEIS AÑOS** de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales pertinentes, como responsable del cargo formulado en su contra en cuanto a ser considerado autor de un delito consumado de Homicidio Simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, cometido el día 21 de noviembre de 2017, en la comuna de Santiago.

Se le eximió del pago de las costas.

En atención a la extensión de la pena aplicada al condenado, no se le concedió pena sustitutiva alguna contemplada en la ley 18.216, por lo que deberá cumplirla en forma efectiva, reconociéndose como abono a su cumplimiento el tiempo que estuvo sometido a prisión preventiva, que en la misma sentencia se consigna.

En contra de la referida sentencia, la Defensoría Penal Pública, por el condenado Arteaga Hidalgo, dedujo recurso de nulidad fundado únicamente en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal en relación a los artículos 73 y siguientes del Código Penal, siendo que este tribunal decidió admitirlo a tramitación, fijándose la audiencia del día 20 de julio del presente año para llevar a cabo su conocimiento en esta Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que se cumplió conforme al mérito del acta que se acompaña, la que da debida cuenta de su realización, con la concurrencia y alegatos de los abogados que en el registro de audio se consignan, actuando en representación del imputado, del Ministerio Público y el querellante particular, siendo que, luego de la vista del recurso, se citó en la misma a los intervinientes a la lectura del fallo ordenada para el día de hoy.

Finalmente, debe dejarse debida constancia que al momento de llevarse a cabo la audiencia para el conocimiento del recurso, no se rindió prueba alguna, por lo que no existe ningún antecedente que consignar al respecto.

**CONSIDERANDO:**



**Primero:** Que, por el recurso deducido por la defensa aduce la causal del **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos, 73 y siguientes del Código Penal y 385 del Código adjetivo.**

La hipótesis cuestionada, es la de haber impuesto una pena superior a la que legalmente correspondía aplicarle.

Luego de reproducir los hechos establecidos en la sentencia y la calificación jurídica de homicidio simple, añade las circunstancias modificatorias consideradas para determinar la pena a aplicar, que fueron la del artículo 11 N°6, la del 11 N°9, y a su vez la eximente incompleta del artículo 11 N°1 en relación al artículo 10 N° 6, todos del Código Penal, consignando en cada caso el fundamento de su respectivo establecimiento, para finalmente hacer referencia a la aplicación del artículo 73 del mismo texto, solicitado por la defensa, momento en el cual a su juicio se produce la errónea aplicación de derecho.

**Segundo:** Que, el defecto se habría producido al momento de no aplicar las consecuencias del artículo 73 del texto penal, siendo que el argumento de la inconcurrencia del mayor número de requisitos de legítima defensa por parte del tribunal oral, dejó de lado la presunción legal que le imponía el inciso 2° del artículo 10 N° 6 del mismo código, refiriéndose solamente a los dos primeros de ellos, y finalmente, aplicando los efectos del artículo 68 del código penal realizando por tanto una errónea aplicación de derecho de la sanción.

Explicitando esto, la defensa señala que en los hechos, el condenado repele un delito de robo con violencia en contra de una tercera persona, por lo que en virtud del artículo 10 N°6 inciso segundo, dispone que: *“Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias o, si es de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433 y 436 de este Código”.*

En consecuencia, al existir una presunción simplemente legal de concurrencia de los requisitos de la legítima defensa, por tanto, debiese



existir argumentación por parte del tribunal, para cada uno de ellos en relación a una eventual desacreditación para su no concurrencia, lo que no ocurre en este caso, el tribunal da primero por acreditada la concurrencia de la agresión ilegítima en el considerando Duodécimo, y posteriormente desacredita la concurrencia del segundo requisito, esto es, la necesidad racional del medio empleado para repelerla, y añade que el fallo expresó que al no operar la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa de terceros, en su segundo requisito, no era menester continuar el análisis de los demás (falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende y que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo).

O sea, no se refirió por tanto el tribunal a los demás requisitos de la legítima defensa, y existiendo respecto de ellos una presunción legal que no fue derribada, se debieron dar por acreditadas también esas dos exigencias, los cuales son la falta de provocación suficiente por parte de quién se defiende y que el agresor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Los que igualmente cabe señalar, no fueron motivo de discusión en el juicio, ya que se dio por acreditado que el imputado pasaba por el lugar al momento de ver que se estaba cometiendo un delito de robo con violencia, lo cual lo motivó a actuar.

**Tercero:** Que, la trascendencia del vicio, es que, al no dar aplicación al artículo 73 del Código Penal en relación a la atenuante reconocida por el fallo del artículo 11 N°1 del mismo cuerpo legal, en circunstancias que debía existir una aplicación obligatoria a lo señalado en la primera norma por su carácter excepcional rebajando en uno dos o tres grados la pena a imponer solo en su consideración, precisamente por existir una presunción legal de concurrencia de los requisitos de esta, igualmente existiría una obligatoriedad del tribunal, de aplicar la norma citada, incurriendo entonces el tribunal, en un doble error.

**Cuarto:** Que, en lo que toca a la influencia, ello se produciría desde que el tribunal no aplica los efectos del artículo 73 del Código Penal, lo que lleva a un error en la imposición de la pena a aplicar, en circunstancias que de haber ajustado su decisión a derecho la decisión hubiese sido rebajar la pena del mínimo legal en uno, dos o tres grados por un lado, y por otro, a que sumado a la concurrencia de las atenuantes de los numerales 6° y 9° del



artículo 11 del Código Penal, debiera haber impuesto una pena máxima de 5 años de presidio menor en su grado máximo, esto es, un grado por la aplicación de las atenuantes del artículo 11 números 6° y 9°, y luego al menos un grado, por la aplicación del artículo 73 en relación al 11 N°1 del Código Penal, pudiendo optar su representado a un cumplimiento sustitutivo de la pena conforme a la ley 18216.

**Quinto:** Que, por lo anterior, pide que se acoja su recurso de nulidad, ordenando invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare con la ley haciendo aplicación conforme a derecho de las normas de determinación de pena en especial del artículo 73 del código penal norma imperativa a la cual no se dio aplicación, lo anterior entendiendo que, en virtud del artículo 385 del Código Procesal Penal, el fallo recurrido, ha impuesto una pena superior a la legalmente procedente.

**Sexto:** Que, el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una excepcionalísima decisión de reemplazo y, dada la causal elegida por el recurrente, esta importa necesariamente aceptar los hechos tal como han sido establecidos, sin cuestionar su construcción ni razonamientos valorativos, por lo que el reproche solo se puede relacionar con aspectos de derecho.

**Séptimo:** Que, asimismo, este medio de impugnación es de carácter extraordinario y de derecho estricto, en que las infracciones alegadas deben ser de tal naturaleza que tengan la suficiencia para variar de manera trascendente lo decidido.

**Octavo:** Que, desde la óptica descrita en los dos motivos precedentes, aparece que en atención a que la motivación elegida, esta supone necesariamente asumir la base fáctica tal como quedó establecida en la sentencia, pretendiendo sólo un cambio en el derecho a ser aplicado a los hechos, los que acepta como inamovibles, lo que permite inferir que todos aquellos consignados en la sentencia, a partir de los cuales el fallo establece



y justifica la figura penal aplicable en la especie, es la del delito ya señalado, así como la de participación punible en el mismo del único acusado de autos.

**Noveno:** Que, en este escenario, despejada ya la fijeza de lo fáctico, lo cierto es que el centro del debate se sitúa acertadamente en lo jurídico -tal como exige la causal- basándose en el desconocimiento de los efectos perentorios del artículo 73 del Código Penal, conocido como eximente incompleta de responsabilidad penal, en relación a la legítima defensa inconclusa reconocida al enjuiciado y, la misma deficiencia respecto de la presunción legal de concurrencia de requisitos que consagra esta última justificante contenida en el artículo 10 N° 6, segunda parte, de igual cuerpo legal, siendo ambos aplicables en la especie, los que al haber sido desconocidos por el fallo, generaron como efecto perjudicial la imposición de una sanción mayor que la que correspondía legalmente fijar al enjuiciado de autos, como autor de un delito de homicidio simple en grado de consumado.

**Décimo:** Que, en efecto, el artículo 73 del Código Penal dispone de manera obligatoria que: *“Se aplicará asimismo la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que trata el artículo 10, siempre que concurra el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que el tribunal estime correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que falten o concurren”*.

A su tiempo, el artículo 11 N° 1 del mismo texto, dispone que se considerará como *minorante* a *“las expresadas en el artículo anterior”* –se refiere a las eximentes-, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”.

Pues bien, la sentencia concluye en señalar, en su motivo duodécimo, que la causal de justificación de *legítima defensa de terceros* alegada por la defensa, contenida en el artículo 10 N° 6, segunda parte del Código Penal no concurre en el presente caso, toda vez que si bien *“...su conducta se encontró en un inicio bajo el amparo del derecho, concurriendo una causal de justificación a su actuar, como es la legítima defensa de terceros, que luego se desvaneció por su temporalidad o extensión-tal como se dirá infra- quedando como una eximente incompleta, o si se quiere, con una antijuridicidad material notablemente disminuida, que debe considerarse*



*como circunstancia atenuante de responsabilidad según lo previsto en el artículo 11 N°1 del Código Punitivo.”*

Más adelante, la sentencia precisa que si bien existió “Agresión ilegítima”, que es el primer requisito de dicha justificante y el esencial para configurarla de manera imperfecta; concluye que no ocurre lo mismo con su segunda exigencia, la de necesidad racional del medio empleado para repelerla, cerrando su análisis a las restantes dos exigencias asumiendo, contrario a derecho, que: “...*al no operar la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa de terceros, en su segundo requisito, recién analizado, no es menester continuar el análisis de los demás (falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende y que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo).*”

**Undécimo:** Que, tal como ya se anticipó, el primer yerro de derecho en que incurre el tribunal en su sentencia en el presente asunto, es inferir que la eximente incompleta del artículo 73 del Código Penal, dejaría de operar en el presente caso por la sola circunstancia que le faltaba uno de los cuatro requisitos aplicables a la legítima defensa de terceros invocada en el juicio (*necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla*), siendo que precisamente esa es la hipótesis necesaria para que opere, siempre y cuando no falte el esencial, lo que también se cumplía en la especie, sin considerar aún los efectos del artículo 10 N° 6, segunda parte del Código Penal, según se dirá más adelante.

**Duodécimo:** Que, un segundo error jurídico, lo constituye el confundir dos instituciones así como sus exigencias y efectos, lo que acontece con la eximente incompleta del artículo 73 del Código Penal, regla de determinación legal de las penas que opera con el artículo 10 de igual texto, pero solo en la medida que no se logren alcanzar todos sus requisitos en cada caso, siempre y cuando “...*concurra el mayor número de ellos*”, esto es, solo podrá faltar uno solo, pero que no sea aquél que revista de esencialidad a la justificante lo que produce como efecto que se genere el efecto normativo de la rebaja, cuyo era precisamente el caso de autos, pues la sentencia reconoce que existió en la especie una agresión ilegítima.

En cambio, la minorante del artículo 11 N° 1 del texto penal, corresponde a una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, limitada en este caso en sus efectos por el artículo 67 de igual texto, en el que si bien



se nutre igualmente –para el presente asunto- de la justificante de legítima defensa de terceros incompleta, pero dado que su influencia de rebaja sancionatoria es de menor entidad, sus exigencias también lo son, lo que se demuestra con la expresión: *“cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad...”*, esto es, podrán faltar más de uno pero al menos deberá concurrir la esencial.

El defecto cobra mayor relevancia, pues debiendo considerar concurrente la situación del artículo 73 del Código Penal, se la reconduce erradamente a la del artículo 11 N° 1, que conforme se explicó no era posible de adecuar al tratarse de instituciones y exigencias diferentes.

**Décimo tercero:** Que, un tercer error de derecho, lo constituye el desconocimiento de los efectos del artículo 10 N° 6, segunda parte del Código Penal, que dispone que: *“Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel....impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos....436 de este Código”*.

En efecto, la propia sentencia estableció que el primer requisito de la legítima defensa de terceros se cumplía (agresión ilegítima), siendo que no ocurría lo mismo con el segundo (necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla). Sin embargo, respecto de la tercera y cuarta, consistentes en 3) falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende y 4) que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo, el artículo citado al inicio del presente fundamento dispone *expresamente* que estas se *presumen que concurren* en el caso de aquél que trate de impedir la consumación del delito de robo con violencia o intimidación, tal como se estableció en el fallo, sin que de su examen se advierta que esta presunción hubiera sido desvirtuada en contrario.

**Décimo cuarto:** Que, conforme lo que se viene razonando, acierta la defensa cuando acusa una errónea aplicación del derecho en la determinación de la pena de su defendido en el presidio mayor en su grado mínimo, toda vez que los yerros detectados han tenido influencia sustancial en esa decisión, pues de haberse aplicado correctamente las disposiciones en análisis, debió significar primero una rebaja obligatoria por el artículo 73 del Código Penal de a lo menos un grado en relación al mínimo de la sanción



QBXJZPBBL

legal, lo que sumado al otro grado de rebaja consignado por el fallo ante la concurrencia de pluralidad de minorantes de responsabilidad (11N° 6 y 11N° 9 del texto penal), correspondía fijar la sanción en el presidio menor en su grado máximo, por lo que al no haberlo hecho así, el recurso de nulidad será acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 373 letra b) y 385 del Código Procesal Penal, se decide que:

Se **ACOG**E el recurso de nulidad interpuesto por la abogada PATRICIA ALVARADO MASAFIERRO, de la defensoría penal pública en representación del sentenciado **JORGE ANTONIO ARTEGA HIDALGO**, en contra de la sentencia definitiva de siete de junio de dos mil veintiuno dictada en los autos Rit N° 449-2019, RUC 1701107595-9 del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que **es nula** y se reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

**Rol N° 2618-2021**

Pronunciado por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro. Sr. Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante Sr. Francisco Ovalle Aldunate.

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO  
MINISTRO  
Fecha: 23/07/2021 10:07:19

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 23/07/2021 09:53:02

FRANCISCO JAVIER OVALLE  
ALDUNATE  
ABOGADO  
Fecha: 23/07/2021 10:22:42





Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



## SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

### Vistos:

Se reproduce la sentencia anulada con las siguientes modificaciones:

a) En el motivo duodécimo, se elimina el párrafo que comienza con *“Entonces, además, al no operar la eximente de responsabilidad penal...”*, hasta el punto aparte.

b) Del mismo fundamento anterior, se prescinde de la expresión: *“..., lo que no obsta para hacer aplicable el artículo 11 N°1 del Código Penal, que opera como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal”*

c) En igual motivo, se excluye su párrafo final que comienza con: *“En tales condiciones tal situación fáctica llevada al plano jurídico...”*, hasta el final del razonamiento.

d) En la reflexión décimo cuarta, se elimina íntegramente su párrafo tercero.

e) En el basamento décimo quinto, letra c.-, se sustituye las palabra “tres” por “dos”; en tanto que, su letra e).-, se descarta.

f) En el motivo décimo sexto, se suprime su primer párrafo y, del siguiente, la expresión “Sin embargo,”, y

g) De la sentencia de nulidad se reproducen los motivos undécimo, duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto.

### Y se tiene además presente:

1°.- Que para la determinación de la pena debe considerarse que el acusado Arteaga Hidalgo resultó ser culpable en calidad de autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal de un delito de homicidio simple, en grado de consumado del artículo 391 N° 2 de igual texto, que contempla una sanción legal de presidio mayor en su grado medio.

2°.- Que, en primer lugar, favorece al sentenciado la circunstancia eximente incompleta del artículo 73 en relación a la legítima defensa de terceros inconclusa por la inconcurrencia solo de la segunda exigencia del artículo 10 N° 6, segunda parte, ambos del Código Penal, situación que por sí sola legalmente obliga a rebajar la sanción al menos en un grado, lo que así se hará, quedando el marco legal en el presidio mayor en su grado mínimo.

CXLN/ZRBBL



**3°.-** Que, igualmente favorecen al sentenciado dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal (artículo 11 N°s. 6 y 9) y no le perjudica ninguna agravante, por lo que por aplicación del artículo 67 del Código Penal, pudiéndose imponer la pena inferior en uno o dos grados, según sea el número y entidad de dichas circunstancias, se rebajará la anterior en otro grado más, quedando ahora en presidio menor en su grado máximo, atendidas las circunstancias particulares de comisión del ilícito en comento, y teniendo presente que se trata del ilícito con mayor disvalor en cuanto a bien jurídico protegido, esto es, la vida.

**4°.-** Que, en consecuencia, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado máximo, esto es, entre los 3 años y día y los 5 años de privación de libertad, fijándose en su máximo legal, esto es los cinco años de presidio menor en su grado máximo.

**5°.-** Que, cumpliendo el enjuiciado con las exigencias de los artículos 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216, se le impondrá como pena sustitutiva la de su libertad vigilada intensiva, estableciéndose un plazo de intervención igual al de la pena impuesta por esta sentencia, debiendo durante este lapso dar cumplimiento a las exigencias que se dirán en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y las citas legales que refiere la sentencia anulada y las de los artículos 29 y 73 del Código Penal, se declara que:

**I.-** Que se **ABSUELVE** a **JORGE ANTONIO ARTEAGA HIDALGO**, ya individualizado de los cargos formulados por el Ministerio Público en su contra como supuesto autor del delito de Receptación de vehículo motorizado, perpetrado el día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en la comuna de Independencia, de esta ciudad.

**II.-** Que se **CONDENA** al sentenciado **JORGE ANTONIO ARTEAGA HIDALGO**, ya individualizado, a la pena de **CINCO AÑOS de presidio menor en su grado máximo** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como **AUTOR** del delito **consumado de HOMICIDIO SIMPLE** previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, cometido en la persona de Jorge Ignacio Díaz Díaz, perpetrado el día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la comuna de Santiago de esta ciudad.



III.- Que reuniendo el sentenciado los requisitos exigidos por la Ley N°18.216, se le impone la pena sustitutiva de **LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA** de los artículos 15 bis y siguientes de la ley 18.216, sustituyéndosele el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por el término de cinco años, debiendo presentarse el sentenciado al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, más cercano al su domicilio y, cumplir, además, durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 de la citada ley.

El condenado deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile respectivo, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, en cuyo caso se les descontará como abono el tiempo que ha estado privado de libertad en esta causa, esto es **novecientos veinticuatro (924) días** según da cuenta el Certificado de la Jefa (S) de Unidad de Causas del Tribunal de origen de esta causa o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.

Para los efectos de lo prevenido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 18.216, se deberá por el tribunal de origen comunicar a Gendarmería de Chile la pena sustitutiva impuesta, informándole y haciendo presente también que una vez que quede ejecutoriada la presente sentencia, se fijará fecha de celebración de “Audiencia de Aprobación de Plan de Intervención Individual” a realizarse ante el Juzgado de Garantía correspondiente.

IV.- Que se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa atendido los argumentos señalados en el considerando Décimo Sexto de la sentencia del tribunal de origen.

V.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970, para lo cual se tomará al condenado las muestras biológicas necesarias para determinar su huella genética e incluirlas en el registro de condenados.



El tribunal de origen deberá, en su oportunidad comunicar a los organismos que corresponda lo resuelto, ejecutoriada que sea la presente sentencia, deberán remitirse al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, para su cumplimiento.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

**Rol N° 2618-2021.** (RIT N°449-2019 del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago)

Pronunciado por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro. Sr. Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante Sr. Francisco Ovalle Aldunate.

JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO  
MINISTRO  
Fecha: 23/07/2021 10:07:21

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA  
MUÑOZ  
MINISTRO  
Fecha: 23/07/2021 09:53:05

FRANCISCO JAVIER OVALLE  
ALDUNATE  
ABOGADO  
Fecha: 23/07/2021 10:22:56



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

